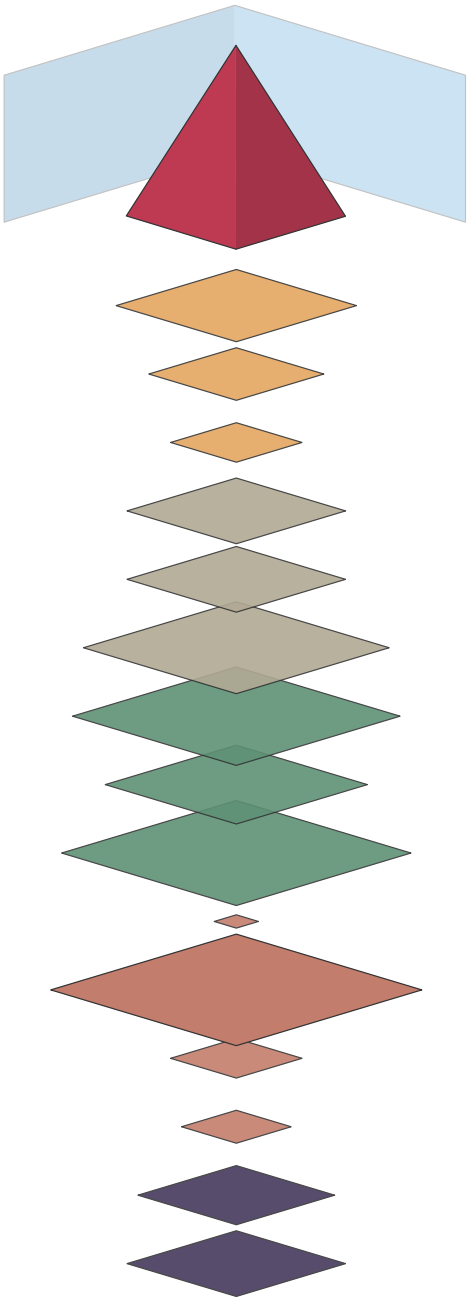
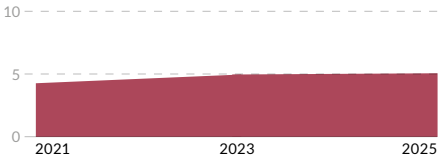
BOLIVIA (ESTADO PLURINACIONAL DE)



5.12 ↗0.17
PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

94.º de 193 países ↗4
22.º de 35 países americanos -
10.º de 12 países de América del Sur -



MERCADOS CRIMINALES 5.03 ↗0.03

TRATA DE PERSONAS	5.50 ↗0.50
TRÁFICO DE PERSONAS	4.00 0.00
EXTORSIÓN Y COBROS ILEGALES POR PROTECCIÓN	3.00 0.00
TRÁFICO DE ARMAS	5.00 0.00
COMERCIO DE PRODUCTOS FALSIFICADOS	5.00 0.00
COMERCIO ILÍCITO DE BIENES DE CONSUMO SUJETOS A IMPUESTOS ESPECIALES	7.00 0.00
DELITOS CONTRA LA FLORA	7.50 0.00
DELITOS CONTRA LA FAUNA	6.00 0.00
DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NO RENOVABLES	8.00 0.00
COMERCIO DE HEROÍNA	1.00 ↘1.00
COMERCIO DE COCAÍNA	8.50 0.00
COMERCIO DE CANNABIS	3.00 ↗0.50
COMERCIO DE DROGAS SINTÉTICAS	2.50 ↗0.50
DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA	4.50 0.00
DELITOS FINANCIEROS	5.00 0.00

ACTORES CRIMINALES 5.20 ↗0.30

GRUPOS DE TIPO MAFIOSO	4.00 0.00
REDES CRIMINALES	5.00 ↗0.50
ACTORES INTEGRADOS EN EL ESTADO	6.50 ↗0.50
ACTORES EXTRANJEROS	5.50 ↗0.50
ACTORES DEL SECTOR PRIVADO	5.00 0.00

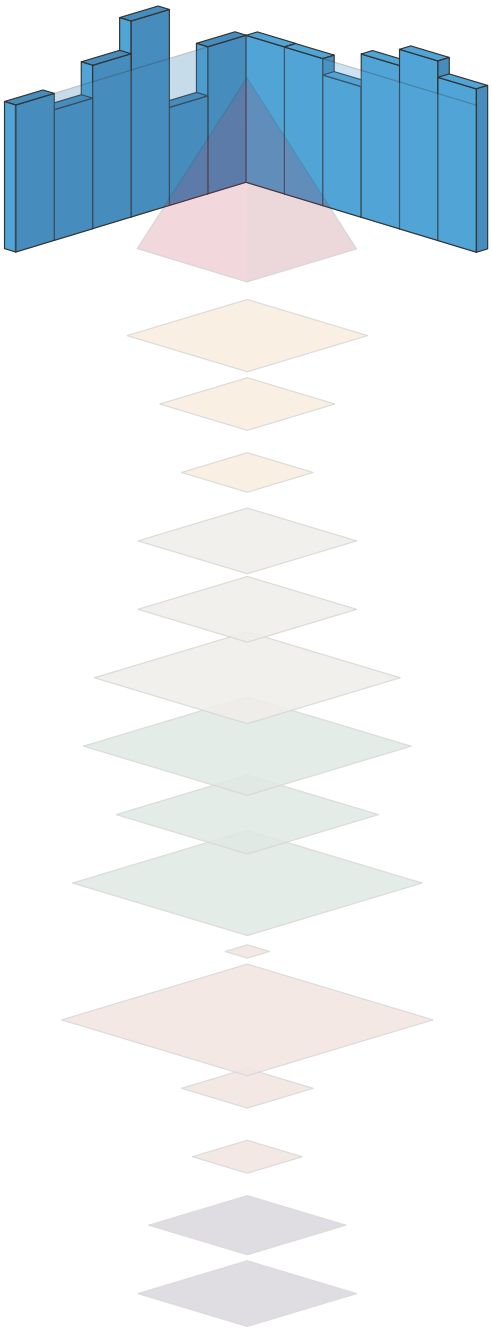
Este proyecto ha sido financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos

enact

Funded by the European Union

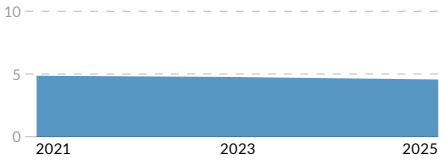
ENACT es un programa financiado por la Unión Europea e implementado por el Institute for Security Studies e INTERPOL, en asociación con Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

BOLIVIA (ESTADO PLURINACIONAL DE)



4.63 ↘0.20
PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

107.º de 193 países ↘9
22.º de 35 países americanos ↘2
6.º de 12 países de América del Sur ↗1



LIDERAZGO POLÍTICO Y GOBERNANZA	4.50	↘0.50
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS	4.00	0.00
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	5.00	0.00
POLÍTICAS Y LEYES NACIONALES	6.00	0.00
SISTEMA JUDICIAL Y DETENCIÓN	3.00	0.00
CUERPOS DE SEGURIDAD	4.50	0.00
INTEGRIDAD TERRITORIAL	4.50	0.00
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO	4.50	0.00
CAPACIDAD DE REGULACIÓN ECONÓMICA	4.00	↘1.50
APOYO A VÍCTIMAS Y TESTIGOS	5.00	0.00
PREVENCIÓN	5.50	↘0.50
ACTORES NO ESTATALES	5.00	0.00

Este proyecto ha sido financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos

enact

Funded by the European Union

ENACT es un programa financiado por la Unión Europea e implementado por el Institute for Security Studies e INTERPOL, en asociación con Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

CRIMINALIDAD

MERCADOS CRIMINALES

PERSONAS

Bolivia es un país tanto de tránsito como de destino para la trata de personas y La Paz, Santa Cruz y Cochabamba son puntos críticos, debido a los vínculos entre la trata, la minería ilegal y el tráfico ilícito de migrantes. Las víctimas, tanto bolivianas como extranjeras, se suelen reclutar a través de agencias de empleo y de modelos o de las redes sociales. Es frecuente el trabajo forzoso en el servicio doméstico, la minería y la ganadería, mientras que la criminalidad forzada y la trata con fines sexuales involucran cada vez más a extranjeros, en particular venezolanos y haitianos. También está demostrado el tráfico de órganos, en el que participan importantes organizaciones criminales internacionales, como el grupo venezolano Tren de Aragua. Las redes del crimen organizado, incluidas las organizaciones internacionales, operan dentro de Bolivia y hay informes que apuntan a la participación de agentes estatales. Las acciones legales han dado lugar a condenas y repatriaciones, pero persisten las lagunas legislativas, especialmente en lo que respecta a las desapariciones forzosas.

Bolivia funciona como país de origen y de tránsito para el tráfico de personas, aunque su magnitud sigue siendo limitada. Las rutas son diversas y afectan principalmente a las que viajan desde Venezuela, Colombia y Perú, a través de Bolivia y Chile, hacia Estados Unidos. El papel de Bolivia en la migración hacia el sur ha disminuido al estabilizarse la crisis en Venezuela. Las redes criminales están activas e incluyen a actores extranjeros, como la posible presencia del Tren de Aragua. El hecho de que los controles fronterizos sean limitados contribuye al tráfico ilícito y se han recibido informes sobre la participación del Gobierno y la facilitación externa. El aumento de las medidas de control ha dado lugar a condiciones más duras para los migrantes.

Está demostrado que hay actores extranjeros, en particular colombianos y venezolanos, involucrados en actividades de extorsión en Bolivia; los colombianos son los más activos, debido a sus vínculos con el narcotráfico. Los préstamos «gota a gota», una práctica notable de usura que consiste en prestar pequeñas sumas a tipos de interés elevados, suelen proceder de los ingresos del narcotráfico. La economía informal de Bolivia favorece la difusión de estos acuerdos financieros arriesgados, pero la escasa información y las limitadas investigaciones ocultan la verdadera magnitud y el alcance del mercado.

TRÁFICO

Bolivia es principalmente un país de tránsito para el tráfico de armas, que proceden de Estados Unidos y se dirigen a Brasil, Paraguay, Chile, Argentina y Perú. Una pequeña cantidad de armas de fuego permanece en el país. El acceso a las armas se realiza a través de las plataformas en línea, la red oscura y las aplicaciones de mensajería cifrada. Recientemente se han incautado armas de fuego de alto calibre, rifles y municiones, a menudo vinculadas a operaciones de narcotráfico. Las autoridades han interceptado envíos en las fronteras entre Perú y Bolivia y entre Chile y Bolivia. En las operaciones dirigidas contra figuras del crimen organizado y funcionarios locales se han encontrado alijos de armas, algunos vinculados a posibles lugares de almacenamiento de drogas, lo que pone de relieve una vez más la intersección entre el tráfico de armas y el narcotráfico en Bolivia.

El país es un destino para objetos falsificados, como artículos electrónicos, ropa y productos farmacéuticos, aunque también se han detectado en el extranjero productos médicos falsificados fabricados en Bolivia, lo que ha hecho sonar las alertas internacionales. Se encontraron medicamentos caducados y falsificados en los mercados locales y en una operación fronteriza con Chile se interceptaron alcohol y ropa falsificados. Además de los artículos falsificados, Bolivia también es un centro clave para el contrabando, ya que hay un comercio ilícito de bienes de consumo sujetos a impuestos especiales profundamente arraigado en su economía. Impulsado por la inestabilidad económica de los países vecinos, las subvenciones gubernamentales y el alto nivel de informalidad, este mercado atrae a redes criminales tanto locales como transnacionales. Entre los principales productos de contrabando se encuentran el alcohol, los cigarrillos y los automóviles. El contrabando de cigarrillos es especialmente significativo, ya que Bolivia sirve tanto de lugar de tránsito como de destino, en particular para los productos paraguayos. El contrabando va acompañado de violencia y de corrupción, lo que afecta a los cuerpos de seguridad. Las autoridades siguen tratando de frenar estas actividades, mediante el aumento de las incautaciones.

MEDIOAMBIENTE

En Bolivia, la deforestación ha aumentado considerablemente en los últimos años, impulsada en parte por delitos ambientales como la tala ilegal. El país sigue siendo una fuente importante de madera ilegal traficada desde el Amazonas y la deforestación suele estar relacionada con otras actividades ilícitas. La madera que se trafica desde Bolivia llega a los mercados internacionales, como Estados Unidos y China, debido a la demanda de especies de alto valor. El país también sirve como centro de tránsito para el contrabando de flora entre Brasil y Perú. Los informes indican la participación de complejas redes de actores estatales y no estatales que perpetúan

estas actividades ilícitas. Estas actividades, que suelen estar respaldadas por financieros externos y por actores locales integrados en el Estado, ponen en peligro a las comunidades indígenas y contribuyen a la expansión del crimen ambiental organizado por toda la región.

Bolivia es, sobre todo, un país de origen para el comercio ilegal de especies silvestres, como aves y reptiles. Si bien gran parte del comercio abastece a los mercados locales, el tráfico transfronterizo es frecuente, especialmente hacia Brasil, Ecuador, Chile y Perú. El departamento de Pando es un punto conflictivo para el contrabando de tortugas y las transacciones abiertas con compradores brasileños ponen de relieve los retos que plantea la aplicación de la ley. Bolivia también ha sido testigo del tráfico de escarabajos rinocerontes, destinados principalmente a Japón, y del aumento del comercio de colmillos de jaguar, vinculado a las redes criminales chinas.

La caza furtiva de jaguares, concentrada en Ixiamas, está estrechamente relacionada con la minería ilegal del oro. La complicidad del Estado agrava el problema, como se ha visto en una prisión en la que se procesaban pieles de jaguar para convertirlas en productos destinados a compradores extranjeros. Los traficantes de especies silvestres —suelen ser ciudadanos chinos— han optimizado sus operaciones, trabajan directamente con cazadores experimentados y evitan a los intermediarios bolivianos, para minimizar su detección. También recurren al soborno para facilitar las exportaciones. Las incautaciones postales de partes de jaguar han disminuido desde el 2019, lo que indica que los métodos de tráfico pueden haber evolucionado. Para adaptarse a una aplicación más estricta de la ley, los traficantes han cambiado a rutas de contrabando a través de Brasil, Vietnam y Hong Kong, con lo cual dependen menos de los envíos directos.

Bolivia está experimentando unos niveles elevados de minería ilegal del oro, impulsada por los precios récord y por la creciente demanda internacional. La escasa supervisión de la minería, las ventas y las exportaciones permite discrepancias entre la producción declarada y las exportaciones reales de oro y hay grandes volúmenes que proceden de fuentes no registradas. Las cooperativas a pequeña escala, que dominan la industria, a menudo se dedican a la corrupción y a violaciones medioambientales, como la extracción en zonas protegidas. Estas cooperativas colaboran a menudo con actores extranjeros para legitimar su oro y aprovechan las lagunas normativas que permiten la falsedad documental. La minería provoca graves daños medioambientales y existe una contaminación tóxica generalizada en torno a los vertederos abandonados. Las redes de contrabando de mercurio, alimentadas por el sector aurífero de Bolivia, abastecen las operaciones mineras ilegales en Brasil y en Perú. Además, el sistema de subsidios a los combustibles de Bolivia se aprovecha para el comercio ilegal y hay redes criminales que contrabandean combustible a los países vecinos. Se ha introducido un sistema de precios escalonados para frenar esta práctica, pero continúa la reventa a precios inflados.

DROGAS

Bolivia ha pasado de ser un centro de tránsito clave a convertirse en un importante productor y exportador de cocaína, a causa de retos estructurales, como la inestabilidad política y la corrupción. El cultivo de coca se ha extendido a zonas protegidas, lo que ha dado lugar a incautaciones récord de drogas. Las redes criminales, incluidas las bandas brasileñas y las organizaciones europeas, desempeñan un papel central en el comercio y los actores integrados en el Estado facilitan el tráfico. El aumento de la producción ha dado lugar a disputas sobre el control y los precios y la regulación se complica, debido a las importaciones de coca peruana. El cambio de las rutas del tráfico y el aumento de los envíos de precursores a través de Chile también indican la capacidad de adaptación de las organizaciones criminales a las medidas regionales de aplicación de la ley y a las restricciones geopolíticas. El mercado de la heroína no está consolidado y no hay indicios de que haya producción ni demanda internas. No se han registrado incautaciones de heroína en los dos últimos años ni se ha identificado al país como un lugar de tránsito para este tráfico.

Bolivia tiene un bajo consumo de cannabis, debido a la preferencia cultural por la hoja de coca. Sin embargo, las incautaciones de marihuana han aumentado considerablemente en los dos últimos años. Sirve sobre todo como zona de tránsito para el tráfico de cannabis, aunque, según se informa, este se introduce de contrabando desde Chile para satisfacer la demanda local.

El país sirve principalmente como lugar de tránsito para las drogas sintéticas, pero los casos recientes indican una tendencia cada vez mayor a la producción local en entornos residenciales. Ha aumentado la demanda de sustancias sintéticas importadas, como la MDMA, el tusi y las metanfetaminas. Dominan el mercado pequeños operadores que importan personalmente las drogas o las fabrican en el país. Todo demuestra que hay una coordinación, con contactos en los Países Bajos y la República Checa, y que los envíos llegan a través de los servicios de mensajería internacionales.

DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA

Según los informes, los niveles de ciberdelincuencia siguen siendo moderados, como en el período anterior. El pirateo se identifica como el tipo de ciberdelincuencia más común y Bolivia se ha enfrentado a una serie de ciberataques contra instituciones públicas y privadas claves. Estas violaciones pusieron de manifiesto las vulnerabilidades de la infraestructura de ciberseguridad del país, lo que dio lugar a la publicación de mensajes antigubernamentales y a la filtración de datos personales sensibles, pertenecientes a ciudadanos y a funcionarios públicos, entre las cuales figuraban algunas autoridades de alto rango.

DELITOS FINANCIEROS

Dado que el panorama político de Bolivia se caracteriza por el clientelismo, cuesta distinguir entre las prácticas políticas y los delitos financieros que implican la complicidad del Estado. Las acusaciones de corrupción y de malversación suelen ser objeto de controversia, debido a la polarización política. El dinero falso, producido principalmente en Perú, sigue circulando en los mercados informales. Además, han proliferado las estafas en las redes sociales, en las que los estafadores secuestran cuentas para ofrecer oportunidades financieras falsas y burlan a las víctimas con enlaces engañosos. Estos cambios ponen de relieve los persistentes riesgos que entrañan los delitos financieros en un contexto de influencias regionales y tecnológicas.

ACTORES CRIMINALES

El panorama del crimen organizado en Bolivia se caracteriza por la existencia de clanes familiares regionales, más que estructuras mafiosas a nivel nacional. Estos clanes, sobre todo los que se dedican a la producción de cocaína, mantienen fuertes vínculos con actores criminales extranjeros. Que se empiecen a producir asesinatos por encargo, llevados a cabo por individuos procedentes de Brasil y de Colombia, en nombre de clanes bolivianos, genera preocupación por un posible aumento de la violencia.

Las redes criminales participan cada vez más en una amplia gama de actividades ilícitas. En La Paz y Oruro, algunas organizaciones poco estructuradas transportan pequeñas cantidades de cocaína, gestionan la distribución de las drogas que entran desde Perú y prestan otros tipos de servicios dentro de la cadena del tráfico de drogas. Algunas de ellas están empezando a poner a prueba su capacidad para producir cocaína base.

Algunas redes criminales poco estructuradas también se dedican al comercio ilícito de productos de contrabando y de bienes de consumo sujetos a impuestos especiales.

En Bolivia, los actores integrados en el Estado propician el crimen organizado a través de la corrupción y la participación directa en actividades ilícitas. Hace mucho que la Policía y otras instituciones están vinculadas al tráfico de drogas y hay altos funcionarios que colaboran con los traficantes. En las regiones donde hay una actividad importante relacionada con las drogas, las figuras políticas afianzan aún más este sistema. Algunos funcionarios también se han visto implicados en el tráfico de personas y en empresas ilegales en las prisiones y la corrupción en el control de las fronteras permite el contrabando y el comercio de productos falsificados. La escasa supervisión de las operaciones de los aeródromos y las pistas de aterrizaje informales también ha convertido a Bolivia en un importante corredor aéreo de cocaína, lo que refuerza su papel en el tráfico transnacional de drogas.

Como proporciona refugio a traficantes valiosos en un contexto de impunidad generalizada, Bolivia se ha convertido en un centro clave en el cambiante comercio mundial de la droga. La expansión de las organizaciones criminales brasileñas, como el Primeiro Comando da Capital y el Comando Vermelho, se ha ido intensificando, a medida que las operaciones de seguridad en Brasil los empujan hacia Bolivia. El cártel venezolano Tren de Aragua ha aumentado su presencia y se dedica al tráfico de personas y al contrabando. Las entidades chinas dominan la minería ilegal del oro y el tráfico de especies silvestres. Los grupos colombianos se dedican a los préstamos abusivos. Los actores peruanos alimentan la extracción ilícita de oro, suministrando mercurio. El mercado de la cocaína también es cada vez más transnacional y hay cárteles albaneses, italianos y mexicanos que forjan alianzas con mafias europeas y rusas para optimizar la logística y el flujo de drogas hacia Europa, lo que incrementa el papel de Bolivia en las redes del crimen organizado.

Diversas industrias, como la maderera, la minera, la ganadera y la inmobiliaria, parecen entrelazarse con el crimen organizado, ya que utilizan estructuras empresariales legales para facilitar las actividades ilícitas. La corrupción sistémica del sistema judicial y de las instituciones reguladoras permite a los actores privados adinerados evadir las investigaciones mediante el soborno.

RESILIENCIA

LIDERAZGO Y GOBERNANZA

Bolivia se enfrenta a importantes retos de gobernanza, determinados por la inestabilidad política, la debilidad del Estado de derecho y un entorno profundamente polarizado. La lucha por el poder dentro del partido gobernante ha provocado la fragmentación interna. La descalificación de un candidato para las elecciones del 2025 desencadenó protestas en todo el país y bloqueos violentos de carreteras, lo que agravó las tensiones. La situación empeoró con la toma armada de un puesto militar. El crimen organizado se está infiltrando cada vez más en el sistema político y hay actores estatales que presuntamente facilitan el tráfico de drogas y actores políticos que aprovechan las instituciones estatales para sus luchas por el poder. Las investigaciones revelaron los vínculos del Gobierno con las redes criminales e incluso hay un alcalde implicado en

actividades relacionadas con las armas y las drogas. Se dice que antiguos funcionarios manipularon las bases de datos sobre los derechos territoriales para permitir adquisiciones fraudulentas de tierras. La polarización social se agrava por la discriminación étnica y racial, que debilita la gobernanza y los procedimientos legislativos. La inestabilidad política culminó en un intento de golpe de Estado en el 2024, que reflejaba las tendencias regionales más amplias de retroceso democrático y creciente fragmentación política. Desde entonces, el Gobierno ha declarado que la lucha contra las drogas es una prioridad nacional, aunque las disputas internas siguen eclipsando la gobernanza.

Bolivia se enfrenta a una corrupción persistente en las instituciones públicas y en los sectores económicos, incluidos los cuerpos de seguridad y las industrias extractivas. Existen leyes anticorrupción, pero apenas se aplican y el soborno suele entorpecer la contratación pública. Un reciente escándalo de corrupción provocó la dimisión de un ministro, lo que puso de relieve problemas sistémicos.

Al parecer, la mala gestión de los fondos públicos ha beneficiado a sus aliados políticos y los programas de infraestructura vinculados al partido gobernante han dado lugar a costes inflados, proyectos inacabados y pérdidas financieras. De la revisión del gasto público se desprende que se desviaron fondos destinados al desarrollo indígena. Las leyes de transparencia son endebles y esto limita el acceso público a la información gubernamental. Aunque los funcionarios deben declarar sus bienes, estos registros siguen siendo inaccesibles, lo que restringe aún más la supervisión y la rendición de cuentas en la administración pública.

Bolivia ha participado activamente en acuerdos internacionales para luchar contra el crimen organizado. Ha ratificado la mayoría de los convenios mundiales, salvo el Tratado sobre el Comercio de Armas, y se ha adherido a acuerdos regionales que abordan el crimen ambiental. La aplicación y el cumplimiento siguen siendo limitados. Durante el período que abarca el informe, Bolivia decidió no renovar la oficina local del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y se opuso a la fiscalización externa. Las tensiones políticas entorpecieron la cooperación bilateral con Chile en materia de tráfico de personas, aunque posteriormente se firmó un acuerdo más amplio sobre criminalidad transnacional. El país colabora con sus vecinos en las medidas contra el tráfico de drogas, con un éxito operativo limitado, y propuso una alianza latinoamericana contra las drogas, para mejorar la cooperación regional, que excluyera la influencia externa.

El marco jurídico de Bolivia presenta notables lagunas en lo que respecta a ajustarse a las normas internacionales, sobre todo en cuanto a los derechos laborales, la protección del medioambiente y la propiedad intelectual. El trabajo forzoso y la explotación sexual comercial siguen sin estar suficientemente tipificados como delitos, lo que limita la protección de los derechos humanos.

Los delitos ambientales persisten, a pesar de las leyes vigentes, ya que hay contradicciones que permiten la deforestación y la minería ilegal. Solo una pequeña parte de las cooperativas mineras disponen de las licencias medioambientales necesarias, lo que agrava las deficiencias normativas. Entre las recientes iniciativas del Gobierno figuran un proyecto de decreto para combatir la minería ilegal y las iniciativas para reducir el uso de mercurio en la extracción de oro. Las leyes contra el contrabando siguen siendo bastante ineficaces, porque encuentran resistencia económica y social. Bolivia también carece de legislación en materia de protección de datos personales y de ciberdelincuencia. Las reformas de la propiedad intelectual están estancadas y no se avanza hacia su aplicación.

JUSTICIA PENAL Y SEGURIDAD

Bolivia sigue siendo el único país en el que los jueces se eligen por votación popular, pero antes el Poder Legislativo tiene que presentar las candidaturas: esto siempre ha permitido que el partido gobernante moldeara el Poder Judicial. Este sistema ha dado lugar a influencias políticas, partidismo, corrupción y la sobrecarga de los tribunales. El Poder Judicial sufre desde siempre de falta de fondos, ya que solo se le asigna una fracción del presupuesto federal. Una parte significativa de los jueces y los fiscales ocupan cargos temporales, lo que los vuelve vulnerables a las presiones políticas. La independencia judicial se ha visto aún más debilitada por la injerencia política, que se extiende incluso a los procedimientos de la justicia penal. Las prisiones preventivas prolongadas provocan el grave hacinamiento que sufren las cárceles, con centros de detención que superan su capacidad en porcentajes de tres dígitos, lo que ha suscitado la preocupación internacional por los abusos de los derechos humanos. Aunque se ha promulgado alguna legislación para mejorar la transparencia en la selección del fiscal general, la influencia política en los nombramientos judiciales sigue siendo generalizada y esto permite unas debilidades sistémicas que el crimen organizado aprovecha.

Existen cuerpos de seguridad especializados en el crimen organizado, el tráfico de drogas, la protección del medioambiente y la inteligencia, pero es necesaria una reforma estructural para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. Si bien el Gobierno reconoce el papel de la Policía en la lucha contra el tráfico de drogas, también reconoce la necesidad de abordar la corrupción. Los delitos ambientales no se investigan, por la falta de personal, la escasez de recursos y la ausencia de registros digitalizados.

Bolivia comparte fronteras porosas con países que son grandes productores y consumidores de drogas. La diversidad de su terreno, que incluye tanto los Andes como el Amazonas, complica la aplicación de la ley, ya que solo hay 16 cruces oficiales y más de 320 pasos ilegales. La seguridad fronteriza sigue siendo escasa, debido a la insuficiencia de recursos, a pesar del aumento de personal en las unidades de control aduanero. La limitada coordinación con los cuerpos de

seguridad vecinos empeora la supervisión, aunque Bolivia ha tratado de cooperar con Chile para frenar el contrabando. La frontera con Argentina es una zona de tránsito clave, donde la interdependencia económica complica la aplicación de la ley. Los laxos controles migratorios y las ambigüedades legales dificultan aún más la supervisión. La resistencia al control estatal es evidente a lo largo de la frontera de Desaguadero con Perú y en las zonas de minería ilegal. Bolivia también carece de capacidad de ciberdefensa, aunque la ciberdelincuencia sigue siendo una amenaza poco prioritaria.

ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO

Bolivia sigue enfrentando retos importantes en la lucha contra el lavado de dinero. A pesar de los recientes intentos de fortalecer su marco normativo contra el lavado de dinero, el país sigue presentando un riesgo de moderado a alto. Los reguladores del sector financiero son conscientes del riesgo, pero la supervisión de las entidades no financieras, como abogados, contables y empresas inmobiliarias, es insuficiente. Las investigaciones se centran en gran medida en el lavado del dinero relacionado con el tráfico de drogas y la corrupción, pero las condenas son poco frecuentes. Aunque el Grupo de Acción Financiera Internacional ha reconocido que ha habido mejoras, persisten algunas vulnerabilidades importantes, especialmente en el sector del oro.

En Bolivia, la economía de mercado impulsada por el Estado está expuesta a la ineficiencia de las empresas estatales y es vulnerable a las crisis externas. Su entorno de inversión es uno de los más riesgosos de América, con un Estado de derecho débil, corrupción, injerencia política y una libertad empresarial limitada. La inestabilidad económica se caracteriza por las bajas reservas de divisas, la escasez de dólares y los problemas de liquidez de los bancos y se agrava por el aumento del precio de los alimentos y la escasez de combustible. Más del 80 % de la población activa trabaja en el sector informal. Las tensiones políticas y las dificultades económicas alimentaban el malestar social, mientras Bolivia se preparaba para las elecciones del 2025.

SOCIEDAD CIVIL Y PROTECCIÓN SOCIAL

Durante el período que abarca el informe, los esfuerzos del Gobierno boliviano para combatir la trata de personas incluyeron protocolos para identificar a las víctimas y un mecanismo nacional de derivación. Sin embargo, hubo menos intentos de proteger a las víctimas que en años anteriores y no consta que ninguna fuera derivada a los servicios de atención. Los cuerpos de seguridad tuvieron dificultades para proporcionar alojamiento seguro a las víctimas y no se derivó a los menores varones a las organizaciones adecuadas. La protección de testigos siguió siendo ineficaz, debido a la desconfianza de la población, pero el Gobierno introdujo un plan de acción para prevenir la revictimización. La Oficina del Defensor del Pueblo no recibió recursos suficientes para trabajar con eficacia. La protección de las especies silvestres mejoró y hay 24 centros operativos para custodiar las especies silvestres, que incluyen centros privados, parques naturales y centros de rescate.

El Gobierno tomó medidas para hacer frente al crimen organizado en varios sectores. En el marco de la Iniciativa PlanetGOLD, se estableció una asociación con la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas para reducir el uso de mercurio en la extracción de oro durante cinco años. En la lucha contra la trata de personas, el Gobierno puso en marcha un programa integral a lo largo de la frontera entre Bolivia y Argentina y proporcionó formación a las autoridades de inmigración. El Plan de Acción Nacional 2021-2025 se centró en la prevención, el apoyo a las víctimas y el procesamiento, aunque no se sabe muy bien cómo se va a financiar. Además, se promulgaron dos decretos supremos para reforzar la regulación y el control de la gasolina y el diésel, así como de sustancias controladas que se utilizan en la fabricación ilegal de drogas.

A pesar de las garantías constitucionales a la libertad de expresión, el Gobierno siempre ha sido hostil a los medios de comunicación críticos y algunos funcionarios públicos y policías acosan y censuran a los periodistas independientes. Las presiones económicas causadas por las sanciones fiscales y la retirada de la publicidad estatal provocaron el cierre de los principales medios de comunicación. La libertad de prensa sigue amenazada, ya que los periodistas se enfrentan a ataques cada vez más frecuentes, especialmente por parte de los cuerpos de seguridad. Las oenegés, aunque están limitadas legalmente, siguen siendo esenciales para poner de relieve cuestiones como el tráfico de los recursos y las violaciones de las mujeres activistas.

Este resumen ha sido financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las opiniones, los hallazgos y las conclusiones expresados en este documento pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan los del Departamento de Estado de los Estados Unidos.